

posiciones y emergen otros, particularmente de ultraderecha o de ligas regionales de dudosas intenciones democráticas. En este sentido no deberíamos olvidar que un 11 por 100 de los españoles estaría dispuesto a apoyar a un partido de ultraderecha y que algunos sondeos conceden importantes porcentajes de intención de voto a Jesús Gil.



La dentera y los agraces

EL Gobierno acaba de hacer público su **Plan de Convergencia** en el que se propone una serie de medidas de desregulación económica tendentes a que en 1996 España cumpla las cuatro condiciones impuestas en Maastricht para participar en la tercera fase de la UEM: a) que la tasa de inflación en los 12 meses anteriores no exceda en más de 1,5 por 100 a la media de los tres países comunitarios menos inflacionistas; b) que el déficit público del conjunto de las Administraciones no sea superior al 3 por 100; c) que la peseta permanezca, sin tensiones y sobre todo sin devaluación, en la banda estrecha de la SME durante al menos dos años; y d) que el tipo medio de interés en los 12 meses anteriores no exceda en más de dos puntos al de los tres estados con mejor comportamiento. Dado el punto de partida (diferencial de inflación de 2,7, intereses mucho más altos, déficit también superior) estas condiciones sólo podrán cumplirse mediante un sacrificio colectivo considerable.

El presidente González y el ministro de Hacienda se han lanzado a la tarea de edulcorar el lenguaje y hablan de

esfuerzo —no de sacrificio— y de medidas estructurales, no de ajuste duro. Sin embargo, la totalidad de los sindicalistas y no pocos economistas de prestigio consideran las medidas que se derivan del plan como un brutal sacrificio y como un ajuste puro y duro.

En primer lugar, el **Real Decreto de Medidas Urgentes sobre Fomento de Empleo y Protección del desempleo** recorta drásticamente las prestaciones de paro y dobla (de seis meses a un año) el período trabajado para tener derecho a la primera prestación.

LA crispación amenaza con desencadenarse en la mayor parte de los trabajadores y con consumir la ruptura entre los sindicatos y el Gobierno, que ha manifestado su intención de llevar a cabo su plan de convergencia con los sindicatos o contra los sindicatos. Los motivos para una huella general son ahora mucho mayores que en el famoso 14-D. Durante muchos años Europa se nos presentó a los españoles como un punto de llegada feliz, en el que nos esperaban mejores prestaciones sociales y mayor prosperidad. Ahora se presenta como una carrera de obstáculos cada vez más difíciles de flanquear y el precio a pagar es mucho más alto de lo esperado. Las nuevas medidas se vienen a sumar a toda una serie de sacrificios ya impuestos o en trance de imponerse: la reconversión minera en marcha y la segunda —o tercera— reconversión industrial, los cupos de producción de leche, los problemas de la flota pesquera en Marruecos, las negras perspectivas sobre el mercado del vino, la doble tasa de corresponsabilidad en los cereales, etc., auguran un crecimiento del paro en la industria y una aminoración notable del crecimiento de las rentas agrarias.

No cuestionamos la necesidad del sacrificio que se nos pide a los españoles, mucho menos la del esfuerzo. El objetivo de estar en la Europa de la primera velocidad lo justifica y así parece entenderlo el Gobierno que arriesga su imagen y probablemente compromete con esta medida sus posibilidades electorales. Pero es de justicia hacer, al menos, algunas reflexiones críticas:

** En primer lugar, el Gobierno es responsable de que estén sin resolver algunos problemas cuya corrección ahora se carga sobre las espaldas de los trabajadores. Concretamente, de las corruptelas del INEM y del tremendo descontrol del gasto público (condición 2.ª de Maastricht) el primer responsable es el Gobierno. Ellos comieron los agraces y otros padecen la dentera.*

** En segundo lugar, a lo largo de las 47 páginas del documento se percibe un desigual tratamiento de los sectores. Las únicas medidas concretas, cuantificadas y con fechas de aplicación son las que exigen esfuerzos y sacrificios a los trabajadores. Las demás (referidas a eliminación de organismos superfluos, actuación en los seguros, etc.) son meras declaraciones de intenciones.*

** En tercer lugar, los reiterados errores cometidos en los últimos años por el Gobierno en sus previsiones de inflación y empleo, justifican todas las dudas sobre la eficacia real de las medidas. Podría suceder que hagamos todos los sacrificios que se nos piden y que, a pesar de ello, en 1996, no lleguemos a cumplir las cuatro condiciones.*